

Las desaparecidas de Juárez

Marcela Turati

Al universo de violencia, horror y muerte, de impunidad y desamparo que vive Ciudad Juárez se suma el drama de las jóvenes desaparecidas. Para activistas, promotores de derechos humanos y familiares de esas chicas, el megaoperativo realizado la madrugada del sábado 23 por policías federales y estatales en esa zona fronteriza fue tan estruendoso como inútil. Les indigna que en la redada no se haya localizado a ninguna de las jóvenes desaparecidas, y se sienten incluso más agraviados porque las autoridades reiteran que en esa zona no operan bandas dedicadas a la trata de personas.

CHIHUAHUA, CHIH.- En el megaoperativo del sábado 23 en el centro de Ciudad Juárez para el rescate de jovencitas desaparecidas –y del cual se pavoneó la Policía Federal– fueron detenidas por unas horas seis menores que ejercían la prostitución, una de las cuales incluso había sido reportada como extraviada, pero el despliegue decepcionó a las familias de las desaparecidas.

Resultó falsa la información difundida ese día por la Secretaría de Seguridad Pública federal de que en esa acción, en la que participó también la policía estatal, hubo 30 arrestos por trata de personas y 20 jóvenes recuperadas.

Lo cierto es que ninguna cantina, casa de huéspedes, baño público, centro nocturno u hotel de paso fue clausurado o multado; ni siquiera dejó de operar El Refugio, el hotel donde fue localizada una quinceañera reportada como desaparecida desde el 31 de mayo. Las menores encontradas escaparon del albergue al que fueron enviadas.

La Red Mesa de Mujeres calificó el operativo como "espectáculo mediático"; Nuestras Hijas de Regreso a Casa lo criticó por ser "una simulación", y el Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas dijo que sus resultados fueron "magros".

"Un día antes, unos padres de familia estuvieron en el centro y vieron muchas más menores que las que encontró la policía. No sabemos si se escaparon o les dieron el pitazo, pero mientras la información se filtre y (los operativos) no vayan acompañados de investigación previa, no encontrarán nada", dijo la fundadora y directora de Nuestras Hijas, Marisela Ortiz.

Pese al despliegue de 300 policías y a las denuncias de familiares de jóvenes desaparecidas, el fiscal de Investigación y Persecución del Delito en la zona norte de la entidad, Jorge González Nicolás, negó que existan bandas dedicadas a la trata de personas.

"No encontramos ningún dato que nos arroje eso", dice a Proceso, aunque admite que el interrogatorio a las detenidas aportará más datos sobre el problema.

Sin embargo, el Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas señala que tan sólo este año han desaparecido 189 chicas en esta frontera, la mayoría en el centro de la ciudad, como Bertha Alicia Vidal Varela, de 17 años, de quien no se sabe nada desde el pasado 19 de mayo; Jéssica Ivonne Padilla Cuéllar, de 16; Paola Ventura Rosas, de 17; Nancy Iveth Navarro Muñoz, de 18, y Bárbara Jacqueline Ortega Flores, de 14, desaparecidas el 7, 13 y 18 de julio, por mencionar algunas.

Según el conteo oficial, de enero a mayo la fiscalía había recibido 100 reportes por desaparición de mujeres en Juárez, la mayoría de adolescentes. La cifra es elevada si se considera que en 2010 fueron 107 las mujeres que desaparecieron en todo el estado.

Desesperadas ante la falta de investigación de los casos durante todo el año, las familias se han movilizadado en Juárez y Chihuahua para exigir resultados; han hecho plantones, caminatas, manifestaciones; bloqueado el puente internacional que une a Juárez con El Paso; tapizado las paredes de cristal de la fiscalía con las fotos de sus hijas, y realizado vigiliass afuera de esa dependencia para festejar a las madres afectadas y el Día Internacional de la Mujer.

Las desaparecidas de Juárez

Aunque Juárez es sinónimo de desapariciones y asesinatos de mujeres desde hace dos décadas, el problema se recrudeció en este sexenio, lo que detonó la movilización de madres.

"A partir de 2008, cuando la violencia se incrementaba y cuando el presidente decidió militarizar la ciudad, las desapariciones de mujeres se incrementaron en 400%", dice Marisela Ortiz, quien abrazó la causa en 2009 a raíz de la desaparición y muerte de una alumna.

"La trata de personas en Ciudad Juárez y en todo el estado es una realidad desde siempre, pero la presencia de estas bandas, protegidas desde algún poder, ha crecido en los últimos tres años, al paralelo de la violencia y la estrategia del gobierno en su contra", declara a Proceso Norma Ledezma, directora del centro Justicia para Nuestras Hijas, que fundó después de esclarecer el asesinato de su hija Paloma.

Y expone: "Se están llevando a chicas de entre 14 y 20 años, de escasos recursos, bonitas, que van de compras durante el día al centro o a solicitar empleo y ya no regresan. Sabemos que se les acercan tipos amables, bien parecidos, oliendo rico, simpáticos. Las invitan a trabajar o les dicen que les van a regalar un celular y ellas no desconfían. ¿Qué muchachita en vacaciones no quiere ganar dinero? Es fácil, no necesitan levantarlas".

Ledezma, defensora de derechos humanos reconocida a nivel internacional, critica a las autoridades por negar que en el estado haya bandas dedicadas a la trata de personas. Resulta obvio que las desapariciones tienen patrones en común, asegura. Y comenta que "hay un cuadro de la ciudad por donde todas pasaron: un callejón, una rutera, un mercado".

Una vez convencidas de seguir al sujeto que las aborda, las jóvenes son llevadas a un lugar donde

son encerradas y del que ya no pueden escapar, relata. Con ellas se hace un intercambio: las norteñas son enviadas al sur del país –sabe de algunas que estuvieron en Puebla y Michoacán– y viceversa. A otras las explotan sexualmente en esa frontera. A todas las hacen adictas a las drogas para que coman poco y se mantengan activas.

"Las traen con protección fuerte, custodiadas, y las ofrecen para dar servicios sexuales a clientes exclusivos. No son ofrecidas a obreros que van a antros, sino a gente de poder económico y político que pueden pagar esos servicios y quieren seguridad, limpieza de las muchachas y belleza", comenta.

Desde hace nueve años, cuando empezó la búsqueda de su hija, Ledezma ha denunciado la operación de bandas criminales dedicadas a la trata que aprovechan las rutas del tráfico de drogas. Dice que las autoridades siempre responden que son casos aislados o que "el novio se las llevó".

Esclavitud sexual

En Latinoamérica, México ocupa el quinto lugar en trata de personas para fines de explotación sexual y en lo que se refiere al secuestro de mujeres, menores de edad o migrantes. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el país los "focos rojos" se encienden en Nogales, Sonora; Acapulco, Guerrero; Tapachula, Chiapas; Tijuana y Mexicali, en Baja California; Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco, y Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Según Justicia para Nuestras Hijas, actualmente existe otro patrón para enganchar a las jóvenes, que consiste en enamorarlas a través de redes sociales como Facebook y convencerlas de que se escapan de casa. Facebook también ha sido utilizado para emprender búsquedas de adolescentes, como es el caso de Perla Margarita Ramos Baylón, estudiante de 21 años que desapareció en una parada de autobús el martes 19 en la ciudad de Chihuahua y por quien hubo una fuerte movilización en internet.

Al día siguiente –según un reporte del portal Tiempo– Ramos Baylón se liberó de sus captores y fue encontrada en una banca. Estaba "en shock, como drogada", y pidió que la llevaran al doctor.

En sus investigaciones, las familias integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa encontraron que en el centro de la ciudad operan varias bandas de tratantes de personas. Las pistas indican que llevan a sus víctimas a Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Tijuana. El Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas ha denunciado que en tables dance, baños públicos, bares y hoteles varias jóvenes trabajan contra su voluntad.

El fiscal González Nicolás admite que las denuncias por desaparición de menores se incrementaron en los últimos meses hasta 15%, por lo que, dice, se activó el Código Alba para entrar al centro de la ciudad, donde recientemente se perdió el rastro a 17 mujeres.

"El operativo se hace de esta magnitud porque el centro de Ciudad Juárez es muy conflictivo. Es lugar de distribución de droga, de trabajo de indocumentados, de contrabando de fayuca, de prostitución, y asiento de buena parte de la delincuencia dedicada al robo, a los asaltos", dice a Proceso.

Los medios locales resaltaron la exclusión, en el operativo, de la policía municipal. El fiscal asegura que no fue por desconfianza.

Los 300 policías estatales y federales inspeccionaron 24 bares, tres hoteles y dos casas de huéspedes, ubicados en las calles Carranza, La Paz, Miguel Ahumada, Globo, Grijalva, Francisco Javier Mina, Noche Triste y Rafael Velarde, de la colonia Centro, señalados como posibles lugares de retención; 470 personas fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía para interrogarlas y levantar un censo de quienes trabajan en el primer cuadro de la ciudad.

"Valió la pena porque encontramos a una señorita reportada como desaparecida, que estaba en condiciones normales –no trabajaba para nadie, no estaba raptada ni la tenían a la fuerza; estaba por gusto dada la situación económica de su familia– y a cinco menores que se prostituían, que no tenían reporte y probablemente algunas ni eran de aquí. Ellas dijeron lo mismo, que estaban por su gusto, hasta se molestaron porque las aseguramos", comenta el funcionario.

González Nicolás calificó como "histórica" la entrada de la policía al centro de la ciudad para "replegar delincuentes" y recuperar ese sector que, dice, era considerado "tierra sin ley".

Sin embargo, Luz Elena Muñoz, progenitora de Nancy Iveth Navarro Muñoz –madre soltera de apenas 18 años, desaparecida el miércoles 13, cuando acudió al centro a solicitar trabajo y por quien se activó la búsqueda–, declaró al periódico Norte que su hija fue vista en el centro de la ciudad antes del megaoperativo e insiste que ella se encuentra ahí.

"Me han dicho que la ven en la zona centro –declaró días después–, pero que como que mi hija está asustada... dice una señora que la vio y le dijo: 'mija, te anda buscando tu mamá', pero que ella dijo 'a mí no me busca nadie', así como asustada. Y dicen que anda con dos tipos. Eso es lo que me da más miedo."

Alto riesgo

La búsqueda de mujeres desaparecidas es una actividad riesgosa en Chihuahua. Varias activistas y madres de familia han sido amenazadas u hostigadas. Es el caso de Norma Ledezma quien, dice, tiene protección policiaca permanente –el mes pasado sus oficinas fueron asaltadas por segunda vez en el año–, y el de Malú García Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien en febrero tuvo que salir del país porque le quemaron su casa.

Lourdes Hernández, madre de la joven Pamela Leticia Portillo, levantada el 25 de julio de 2010 en la ciudad de Chihuahua con un teniente, ha sido amenazada en la calle por desconocidos en varias ocasiones, e incluso le han apuntado con pistola.

"Por todas las amenazas, que fueron tantas, tuvimos que decir a la fiscalía y al Ejército que ya no la íbamos a buscar y hasta parece que se alegraron porque nos quitaron de encima. Pero nunca la vamos a dejar. En julio empezamos nuevamente a buscarla", dice Lucía Hernández, tía de Pamela.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, también involucrado en la documentación de desapariciones de mujeres, fue allanado en mayo pasado por elementos de la Policía Federal.

"Hemos recibido todo tipo de amenazas tanto las integrantes de la asociación que denuncian la desaparición o asesinato de sus hijas, como quienes lideramos la asociación. Desde que me han puesto la pistola en la cabeza, me han amenazado con asesinar a mis hijas al grado de tener que sacarlas del país. Me han intentado secuestrar en plena calle, recibimos dos impactos de bala en

nuestra camioneta; además, intentaron meterse a nuestra casa gentes armadas que se identificaron como policías del estado.

"Nuestra vida ha estado en riesgo desde siempre. No es nuevo, pero este momento que vivimos sí es de mayor riesgo, por todo lo que ha ocurrido contra defensores de derechos humanos", dice Marisela Ortiz, quien vive en el exilio desde marzo pasado a raíz de que la amenazaron de muerte en una manta.

<http://www.proceso.com.mx/?p=277481>

Revista Proceso.
31 de Julio de 2011.
No.1813.
Edición: Religión.

México: Un obispo acosado por católicos

Arturo Rodríguez García

SALTILLO, COAH.- La mañana del jueves 14 en las rejas de la catedral de esta ciudad aparecieron mantas que decían: "Queremos un obispo católico".

La diócesis, encabezada por Raúl Vera López, concluyó que las mantas fueron colgadas por un grupo conservador local en el que participan al menos dos sacerdotes que han externado su molestia por el apoyo que brinda a un grupo lésbico gay bisexual travesti transgénero transexual intersexual (LGBT) católico llamado Comunidad de San Elredo (CSE).

Esta comunidad surgió hace nueve años en Saltillo. Su nombre viene de San Elredo de Rievaulx, monje británico del siglo X invocado por las comunidades episcopales gays en Europa, ya que en sus escritos hay reflexiones homosexuales.

La comunidad, de unos 600 miembros, participa en el debate sobre temas de homosexualidad y ha desarrollado programas de trabajo para combatir la discriminación, la intolerancia y la hostilidad hacia ese sector. Integrantes de la comunidad han sido objeto de ataques físicos y hostigamiento mediante mantas colgadas en el exterior de la parroquia de El Calvario, donde suelen celebrar misas mensuales, oficiadas en ocasiones por el propio Vera.

El obispo –quien se manifestó a favor del Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila que posibilitó el reconocimiento a la unión entre personas del mismo sexo– incluso destinó un espacio en la sede obispal a la comunidad, lo que el ha valido severas críticas, sobre todo desde que el grupo empezó a tener una mayor convocatoria a sus actividades, como ocurrió en marzo pasado.

En esa ocasión, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside Raúl Vera, y el Centro Diocesano de Comunicación Social de la curia difundieron el programa de actividades del Cuarto Foro de Diversidad Sexual, Familiar y Religiosa, lo que desató la embestida de ACI Prensa, una agencia católica de noticias con sede en Perú.

Ésta retomó la información publicada por el periódico Vanguardia y entró en contacto con varios católicos conservadores de Saltillo y también con el sacerdote Robert Cougan, asesor espiritual de la CSE, quien dijo que su grupo tiene el respaldo de Raúl Vera.

El pasado 22 de junio, Noé Leonardo Ruiz Malacara, coordinador de la CSE, anunció que propondrían una reforma legislativa para que el coahuilense Pacto Civil de Solidaridad fuera un matrimonio civil; ACI Prensa tituló: “Grupo gay apoyado por obispo pedirá ‘matrimonio’ homosexual”.

La Iglesia y los homosexuales

En su número 1652, Proceso publicó las declaraciones de Raúl Vera. Sobre la homosexualidad dijo: “Muchas veces se quiere hacer ver que la Iglesia condena a los homosexuales; eso no es verdad empezando porque las preferencias sexuales diferentes obedecen a circunstancias que no son manejadas ni siquiera por las personas que las tienen”.

Sobre los pactos civiles afirmó que su apoyo era porque el sector LGBT es uno de los más desprotegidos, débiles y vulnerables de la sociedad, que debía ser sujeto de tutela del Estado en términos de seguridad social, derecho hereditario, salud y otros. Sin embargo lo que no aceptaba era el uso del vocablo matrimonio:

“Hay una moral clara respecto de la sexualidad pues los actos de esta índole no se entienden fuera del matrimonio; éstos están ligados a la concepción de la vida y la reproducción de la especie. Y el contexto en el que se debe hacer (el acto sexual) es el matrimonio, para que garantice la función que el hombre tiene de proteger la vida y conservarla. Ésta es una concepción teológica y antropológica de lo que es el matrimonio”, señaló.

Como en esa ocasión, Vera ha rechazado reiteradamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no los contratos civiles, por lo que acusó a ACI Prensa de manejar tendenciosamente la información sobre su trabajo con la Comunidad de San Elredo.

“Me acusan de ir contra el magisterio de la Iglesia, de promover la homosexualidad, cuando nuestros objetivos son muy claros y consisten en coadyuvar en la recuperación de su dignidad como personas, vulnerada en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en todas partes.”

No obstante, Robert Cougan y Noé Leonardo Ruiz tienen una postura distinta. La Comunidad de San Elredo ha mantenido una relación estrecha con el fraile dominico gay James Alison, teólogo británico conocido en el ámbito internacional por su promoción de la apertura de la Iglesia a la homosexualidad y partidario de erradicar el celibato.

Como Alison, Cougan y Ruiz han cuestionado que la noción de la Iglesia, en el sentido de que las relaciones sexuales son sólo reproductivas, limita a los católicos homosexuales y es una visión restrictiva.

Ruiz se ha manifestado por el matrimonio civil, pero lo ha hecho fuera del contexto de la Iglesia, según ha clarificado, pues tiene una noción clara de que no cabe en el matrimonio religioso. La visión, parcialmente opuesta, entre la Comunidad de San Elredo y Raúl Vera ha sido omitida en la cobertura de ACI Prensa, por lo que el obispo la acusa de ser un factor de hostigamiento.

Plan pastoral

En febrero, la diócesis de Saltillo presentó su Plan Diocesano Pastoral, donde la CSE tiene como objetivos y metas específicas difundir la necesidad de salvaguardar la dignidad de la comunidad LGBT “en una Iglesia incluyente” y generar un proceso de formación en derechos humanos y laborales para sus miembros.

La difusión del documento fue mal vista por los sacerdotes conservadores que, en entrevista con Proceso, Raúl Vera no quiere identificar. “Parece mentira que tras la visión del concilio (Vaticano II), después de 40 años haya gente que para nada ha captado que la Iglesia no es una entidad donde se cultive una religión intimista, sin relación con la realidad.

“Creo que esto es de grupos que están más reducidos, porque en general la gente ha desarrollado una concepción de una Iglesia diferente. Falta dar el paso a muchos hermanos para que lleguen a ser parte de una Iglesia que se preocupa plenamente, como entidad religiosa, de la realidad en que se está viviendo”, dice.

La realización de campañas negras contra Vera ha sido una constante desde su llegada a la diócesis de Saltillo. En medios locales se le han atribuido “conductas mundanas”; tras visitar en julio de 2006 a las bailarinas y prostitutas de Castaños violadas por militares, se publicó que había ido a un table dance.

Sin embargo, organismos defensores de los derechos humanos expresaron su solidaridad con el prelado. Rupert Knox, representante en México de Amnistía Internacional, exigió que se garantizara su seguridad ante el hostigamiento de que es objeto.

La diócesis de Saltillo emitió un documento el 15 de julio, firmado por el vicario Gerardo Escareño, donde se establece el fundamento doctrinal, con base en el Concilio Vaticano II y el Sínodo de Obispos de 1971, de las acciones y el plan pastoral de Vera.

Respecto de la Comunidad de San Elredo, Noé Leonardo Ruiz, asentó que si el obispo Raúl Vera se ve amenazado o en problemas con El Vaticano, están en posición de retirarse de la curia. Además de señalar la homofobia y la intolerancia que caracterizan a la jerarquía católica, llega a un conclusión: “La homofobia y la intolerancia no existirían si aportáramos dinero, como Marcial Maciel que les compró el silencio; nosotros no necesitamos su silencio y definitivamente no les vamos a pagar por el respeto a nuestra dignidad. Si esto pone en peligro la labor de don Raúl, nos iremos de la diócesis”.